

Ciudad de México a 17 de septiembre del 2019

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, PRIMERA SALA

P R E S E N T E

Con fundamento en los artículos 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos –en los que se determinan que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales–, 23, apartado 1, inciso a) de la Convención Americana de Derechos Humanos, 2° y 6° de la Carta Democrática Interamericana, así como en el acuerdo sexto del Acuerdo General 2/2008 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quienes suscribimos este documento, profesoras, profesores y especialistas en derechos humanos, pertenecientes a distintas instituciones académicas y de investigación, de la manera más respetuosa, comparecemos ante este Juzgado con el fin de ofrecer nuestra opinión técnica sobre **la relevancia de la participación de las y los defensores de derechos humanos y miembros de colectivos de víctimas en el acompañamiento de las víctimas indirectas de desaparición, lo que incluye el acceso a las carpetas de investigación**. Lo hacemos en calidad de

A M I C U S C U R I A E

Señalamos como correo electrónico para recibir notificaciones el siguiente Lvazquez@flacso.edu.mx así como el número de celular +52 55 3316 9814.

El argumento se construye considerando que:

- México se encuentra en una crisis de graves violaciones a derechos humanos en donde entre 2007 y 2018 puede haber entre 40 mil y cientos de miles de personas desaparecidas.
- Las características socioeconómicas de las personas desaparecidas agravan el estado de indefensión de ellas y de las víctimas indirectas de desaparición, aspecto que se profundiza cuando se trata de migrantes en tránsito.

- Si bien el marco regulatorio mexicano establece un asesor jurídico gratuito, de facto no existen asesores jurídicos suficientes para atender adecuadamente a la totalidad de las víctimas indirectas de desaparición.
- Suponiendo que hubiere una cantidad suficiente de asesores jurídicos gratuitos, de cualquier forma las víctimas indirectas de desaparición requieren de un acompañamiento multidisciplinario que garantice y proteja tanto los aspectos jurídicos como emocionales. Las y los defensores (incluidos los miembros de colectivos de víctimas) tienen mayores capacidades técnicas para este tipo de acompañamiento en comparación con los asesores jurídicos gratuitos.
- El artículo primero constitucional establece el principio pro persona, lo que implica que toda norma debe interpretarse de forma tal que el alcance y contenido en la garantía y protección de los derechos humanos sean expansivos.
- Las víctimas indirectas de desaparición forzada no tendrán acceso a la justicia ni debido proceso si se interpreta de forma restrictiva su derecho a nombrar representantes, y se impide el acceso a las carpetas de investigación a las y los defensores de derechos humanos y miembros de colectivos de víctimas que las acompañan, de forma multidisciplinaria, en su proceso.

1. PROCEDENCIA DEL *AMICUS CURIAE*

La figura del *amicus curiae* –los amigos de la Corte– es una institución jurídica a través de la cual terceros, que no tienen legitimación procesal en un juicio, promueven de manera voluntaria una opinión técnica de un caso que involucra aspectos de trascendencia social o aportan elementos jurídicamente trascendentes, para efecto de que el juzgador pueda tomarlos en cuenta al dictar una resolución.

Así lo ha señalado el Décimo Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa del Primer Circuito¹, quien en el amparo en revisión R.A. 37/2017 formó precedente judicial al tenor de lo siguiente:

¹ Véase al efecto la página 9 y siguientes de la versión pública de la sentencia dictada en el amparo en revisión R.A. 37/2017, en la que por unanimidad los magistrados del Décimo Tribunal Colegiado de Circuito concedieron amparo y protección de la justicia de la Unión a la parte quejosa y recurrente.

“AMICUS CURIAE. SUSTENTO NORMATIVO DEL ANÁLISIS Y CONSIDERACIÓN DE LAS MANIFESTACIONES RELATIVAS EN EL SISTEMA JURÍDICO MEXICANO. La figura del *amicus curiae* o amigos de la corte o del tribunal, por su traducción del latín, constituye una institución jurídica utilizada, principalmente, en el ámbito del derecho internacional, mediante la cual se abre la posibilidad a terceros, que no tienen legitimación procesal en un litigio, de promover voluntariamente una opinión técnica del caso o de aportar elementos jurídicamente trascendentes al juzgador para el momento de dictar una resolución involucrada con aspectos de trascendencia social. Así, aunque dicha institución no está expresamente regulada en el sistema jurídico mexicano, el análisis y la consideración de las manifestaciones relativas por los órganos jurisdiccionales se sustenta en los artículos 1o. y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el diverso 23, numeral 1, inciso a), de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, así como en el Acuerdo General Número 2/2008, de diez de marzo de dos mil ocho, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el que se establecen los lineamientos para la celebración de audiencias relacionadas con asuntos cuyo tema se estime relevante, de interés jurídico o de importancia nacional. DÉCIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo en revisión 37/2017. Documenta, Análisis y Acción para la Justicia Social, A.C. 22 de marzo de 2018. Unanimidad de votos. Ponente: Jorge Arturo Camero Ocampo. Secretario: Ángel García Cotonieto”².

En otras palabras, como se ha reconocido en el caso *Kimel* vs. Argentina resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos³, los *amici curiae* son “presentaciones de terceros ajenos a la disputa que aportan a la Corte argumentos u opiniones que pueden servir como elementos de juicio relativos a aspectos de derecho que se ventilan ante la misma”.

2. CONTEXTO DE LA DESAPARICIÓN Y DE LAS VIOLACIONES A DERECHOS HUMANOS EN MÉXICO

La desaparición forzada de personas es considerada, a nivel internacional, como una de las más graves violaciones de derechos humanos y uno de los peores crímenes derivados de la multiplicidad de factores e impactos en las víctimas de este crimen. Si bien el fenómeno ha

² Décima Época; Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación; Libro 54, Mayo de 2018, Tomo III; Tesis: I.10o.A.8 K (10a.); página: 2412.

Nota: El Acuerdo General Número 2/2008, de diez de marzo de dos mil ocho, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el que se establecen los lineamientos para la celebración de audiencias relacionadas con asuntos cuyo tema se estime relevante, de interés jurídico o de importancia nacional citado, aparece publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVII, marzo de 2008, página 1889.

³ Véase para tal efecto la sentencia de 2 de mayo de 2008 dictada en el caso de referencia, disponible en http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_177_esp.pdf.

ido evolucionando a través de las décadas, y hoy en día la desaparición de personas se configura de manera distinta a lo que sucedía en el continente americano en la década de los años setenta (esto varía también según el contexto de cada región), lo cierto es que existen componentes generales de los que se ha ocupado el derecho internacional de los derechos humanos para visibilizarlo, prevenirlo y erradicarlo.⁴

México enfrenta una grave problemática en materia de desaparición de personas. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante la Comisión IDH) en su visita *in loco* a México manifestó su preocupación por lo que denominó una “grave crisis de derechos humanos”, caracterizada por una situación extrema de inseguridad y violencia; graves violaciones, en especial desapariciones, ejecuciones extrajudiciales y tortura; niveles críticos de impunidad y una atención inadecuada e insuficiente a las víctimas y familiares.⁵

Desde 2007, hay al menos 40,000 personas cuyo paradero se desconoce, muchas posiblemente como resultado de desapariciones⁶. Actualmente y de acuerdo con la información difundida por el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas elaborado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el número de personas desaparecidas asciende a 37,435 a nivel local y federal⁷.

Sin embargo, esta cifra sólo da cuenta de los casos de desaparición que fueron denunciados ante el ministerio público federal o local. Sabemos que el 95% de los delitos que se cometen en México no son denunciados, aunque el porcentaje varía según el tipo de delitos. Por ejemplo, cuando se trata de delitos sexuales, el porcentaje sin denunciar llega al 99%. En cambio, cuando se trata de homicidios, el porcentaje es mucho menor.

Podemos darnos una idea de cuantas personas han sido desaparecidas, independientemente de que haya o no denuncia, por medio de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre la Seguridad Pública que realiza el INEGI. Hogar tras

⁴ El *Informe Final sobre Indicadores para Medir las Prohibiciones de Tortura y Desaparición Forzada de Personas* de la FLACSO México de 2017, bajo la coordinación de la Dra. Sandra Serrano, sirvió como fuente para la revisión de estándares generales en materia de desaparición forzada en categorías específicas.

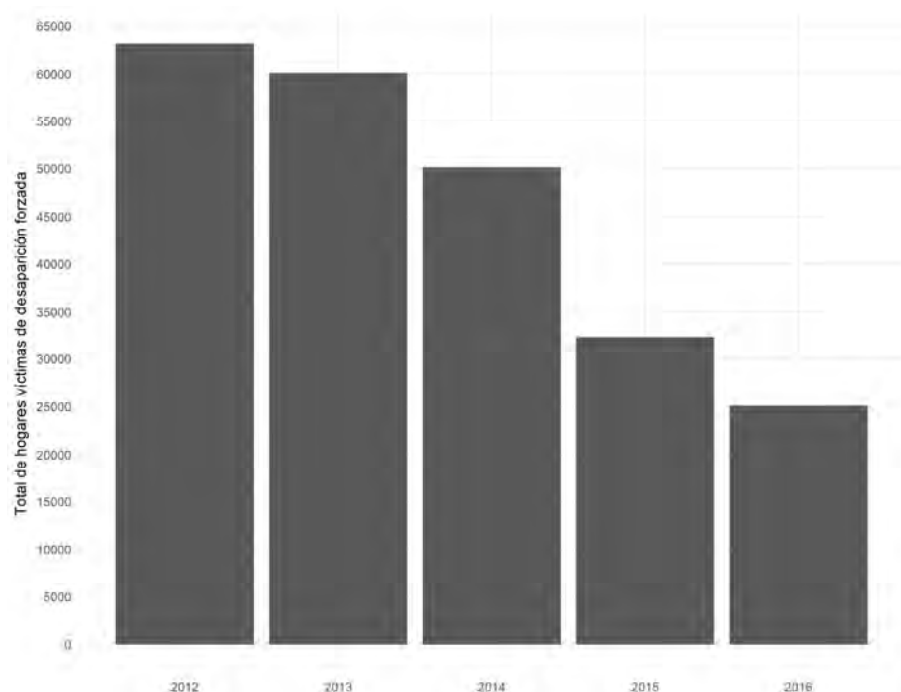
⁵ Comisión IDH, Comunicado de prensa: “CIDH culmina visita *in loco* a México”, 2 de octubre de 2015.

⁶ OACNUR, “Declaración del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, con motivo de su visita a México”, 7 de octubre de 2015.

⁷ Secretaría de Gobernación, Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, “Estadísticas Fuero Federal” y “Estadísticas Fuero Local”, actualizado hasta el 31 de mayo de 2018, disponible en: <https://www.gob.mx/sesnsp/acciones-y-programas/registro-nacional-de-datos-de-personas-extraviadas-o-desaparecidas-rnped>

hogar, se pregunta a las personas encuestadas si fueron víctimas de delito, aunque no lo hayan denunciado. En particular se les pregunta: Durante el año anterior, ¿algún integrante de este hogar desapareció de manera forzada o en contra de su voluntad, por la acción de una autoridad o un grupo delictivo? De acuerdo con las personas encuestadas, tan sólo en el 2012 hubo más de 60 mil hogares en donde por lo menos una persona sufrió de desaparición forzada.

Total de personas desaparecidas, 2012 - 2016



Fuente.- Elaboración propia con base en datos de la ENVIPE.

Si miramos lo sucedido entre el 2012 y el 2016 de acuerdo con la ENVIPE, las cifras del RNPED pueden estar muy por debajo de lo que en realidad sucedió en México en torno a la desaparición.

Más grave aún, ninguna de estas dos fuentes de datos da cuenta de las personas migrantes que se encontraban en tránsito en México y que fueron desaparecidas. Uno de los pocos datos sobre migrantes desaparecidos fue dado a conocer en el 2012 en una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde un conjunto de

organizaciones calculó que entre 2007 y el 2011 habían desaparecido 70 mil migrantes en México⁸.

En el informe sobre la situación de los derechos humanos en México de 2017, el Departamento de Estado de Estados Unidos manifestó su preocupación por los reportes de casos de desaparición forzada realizadas por las fuerzas de seguridad o la delincuencia organizada y la existencia de acusaciones de colusión estatal. También destacó la falta de estadísticas precisas que den cuenta del número real de personas desapariciones de manera forzada en el país.⁹

En el mismo sentido, el Informe de 2017 de la organización internacional *Human Rights Watch* consigna la práctica de la desaparición forzada por parte de las fuerzas armadas desde el año 2006 y la incapacidad estructural de parte de las policías e instancias de procuración de justicia para investigar de forma adecuada y la carga para las familias que supone el tener que suplir las deficiencias de las autoridades y realizar búsquedas de forma directa.¹⁰

Por su parte, el Comité contra la Desaparición Forzada (CED), con mandato sobre la Convención para la Protección de Todas las Personas contra las desapariciones forzadas del sistema de protección universal de derechos humanos de las Naciones Unidas informó que desde que la Convención entró en vigor en el año 2010 había alcanzado una cifra de 500 casos mediante el mecanismo de acción urgente el pasado mes de junio.¹¹ Se reveló que 66% de las acciones emprendidas por el Comité CED bajo esa figura de naturaleza humanitaria correspondían a casos de México, seguido de Irak y Colombia.¹²

⁸ Ver: <https://www.animalpolitico.com/res-publica/migrantes-desaparecidos-en-mexico-aqui-estanas-madres/>

⁹ United States Department of State Bureau of Democracy, Human Rights, and Labor, *Country Reports on Human Rights Practices for 2017. Mexico 2017 Human Rights Report*, 2018, pág. 3, disponible en: <https://www.state.gov/documents/organization/277589.pdf>

¹⁰ Human Rights Watch, *Informe Mundial 2017. México*, publicado en 2018, pág. 1, disponible en: https://www.hrw.org/sites/default/files/mexico_3.pdf

¹¹ ONU, Comité CED, “El Comité contra la Desaparición Forzada registra caso número 500”, 13 de junio de 2018; ONU Noticias, “Comité contra la Desaparición Forzada registra 500avo caso en México. El país suma 66% de los casos”, 14 de junio de 2018.

¹² *El Universal*, “ONU: 66% de las 500 acciones urgentes emitidas por desaparición son sobre México”, 13 de junio de 2018; *El Economista*, “Acumulan casos de desaparición en comité de ONU”, 13 de junio de 2018.

3. QUIÉNES SON LAS VÍCTIMAS DE DESAPARICIÓN EN MÉXICO

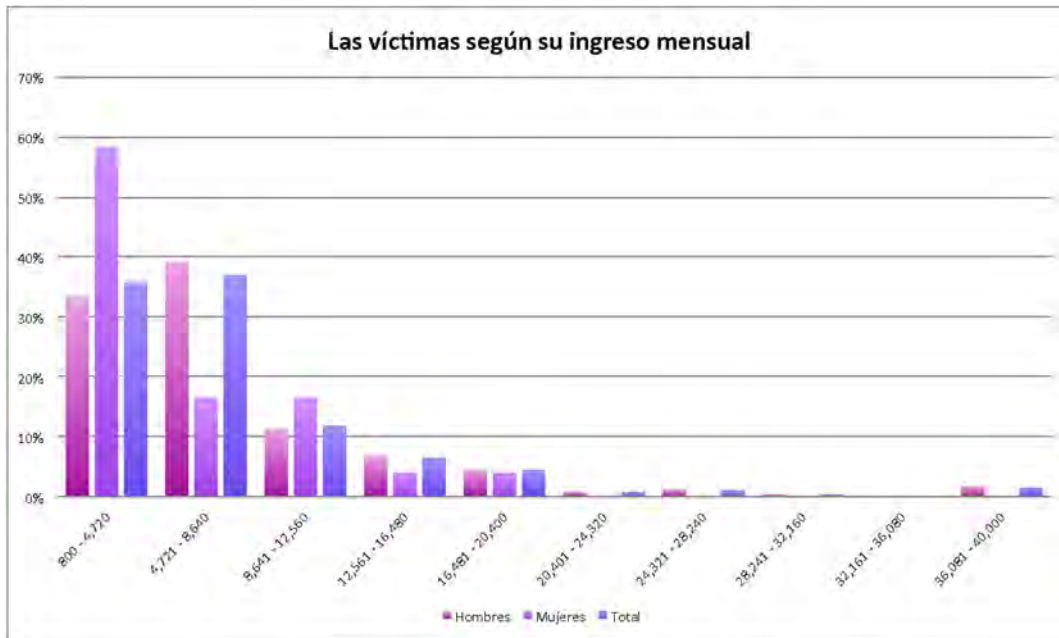
Existen pocos datos que nos permiten dar cuenta de ¿quiénes son las personas desaparecidas en México? De acuerdo con los informes elaborados para Nuevo León por el OBSERVATORIO SOBRE DESAPARICIÓN E IMPUNIDAD de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales sede México, las víctimas de desaparición tienen el siguiente perfil.

- El grueso de las personas desaparecidas son hombres de entre 18 y 40 años.
- Para el caso de desaparición de mujeres, la edad se concentra entre los 18 y 25 años.

Las víctimas según su edad						
Rangos de edad	Total		Hombres		Mujeres	
	Número	%	Número	%	Número	%
0 a 1	0	0%	0	0%	0	0%
2 a 9	1	0.3%	1	0.3%	0	0%
10 a 17	20	5.1%	15	4.4%	5	9.8%
18 a 25	124	31.5%	99	28.9%	25	49.0%
26 a 33	110	27.9%	102	29.8%	8	15.7%
34 a 41	75	19.0%	67	19.6%	8	15.7%
42 a 49	40	10.2%	38	11.1%	2	3.9%
50 a 57	15	3.8%	13	3.8%	2	3.9%
58 a 65	5	1.3%	4	1.2%	1	2.0%
66 a 73	4	1.0%	4	1.2%	0	0%
74 o más	0	0%	0	0%	0	0%
Total	394	100%	343	100%	51	100%

Fuente: Observatorio sobre Desaparición e Impunidad en México con base a documentación de CADHAC

Si miramos el ingreso mensual de las víctimas, se trata de personas que cuentan con un empleo y un salario, aunque tienen ingresos bajos.



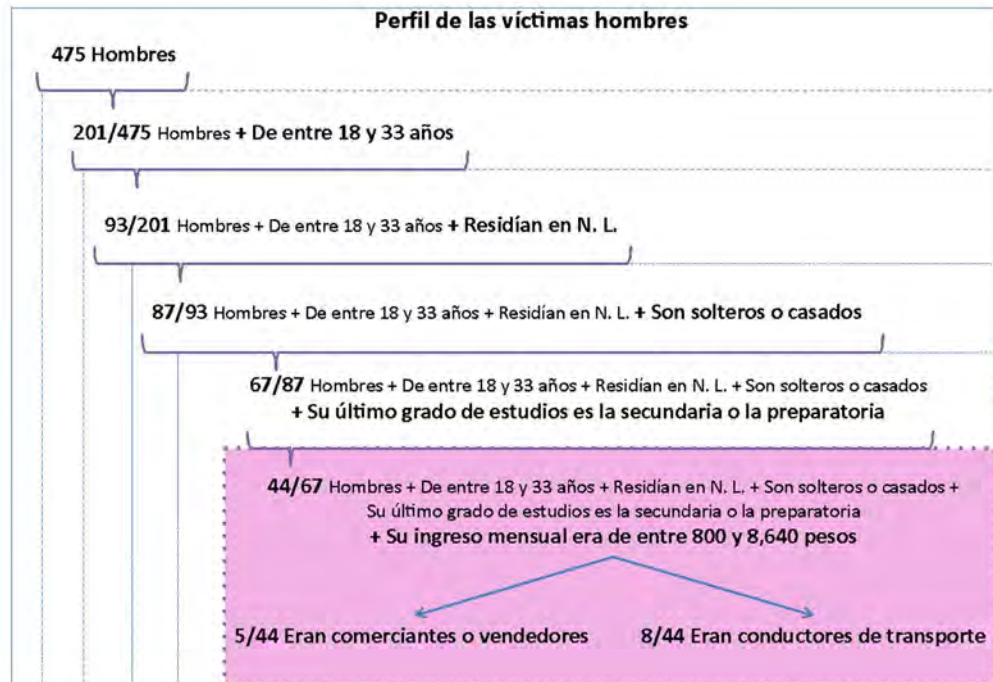
Fuente: Observatorio sobre Desaparición e Impunidad en México con base a documentación de CADHAC

Y si miramos la escolaridad, el nivel se concentra en la secundaria, aunque también hay personas que sufrieron desaparición con grado de preparatoria.



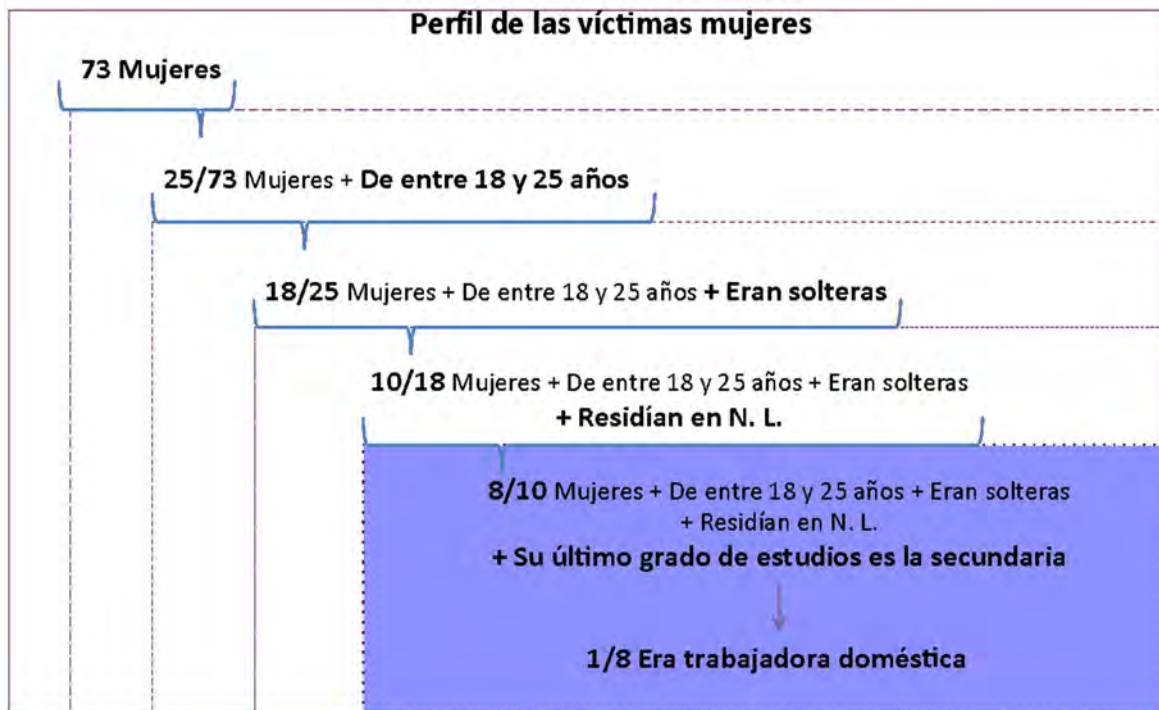
Fuente: Observatorio sobre Desaparición e Impunidad en México con base a documentación de CADHAC

Con estos datos se puede hacer el siguiente perfil de hombres: jóvenes, en su mayoría solteros, con grado máximo de estudios de secundaria o preparatoria, empleados, con bajos salarios.



Fuente: Observatorio sobre Desaparición e Impunidad en México con base a documentación de CADHAC

Y el siguiente perfil para mujeres: jóvenes, en su mayoría solteras, con un grado máximo de escolaridad de secundaria, empleadas, con bajos salarios.



Fuente: Observatorio sobre Desaparición e Impunidad en México con base a documentación de CADHAC

Otro grupo importante de personas desaparecidas de las cuales no tenemos datos son los migrantes que se encuentran en tránsito en México a fin de llegar a Estados Unidos. Ya mencionamos líneas arriba que lamentablemente no hay cifras oficiales sobre personas migrantes desaparecidas en México. La única cifra que existe calcula 70 mil migrantes desaparecidos entre 2007 y el 2011. El aspecto central es que las personas migrantes que se encuentran en tránsito por México tienen condiciones socioeconómicas semejantes a las que el Observatorio ha encontrado en las y los desaparecidos mexicanos.

La gravedad de la crisis de desaparición de personas en México, las falencias estructurales del sistema de justicia mexicano, y el perfil socioeconómico de las víctimas de desaparición fomentan la impunidad: las investigaciones no se realizan con debida diligencia, enfrentan serios problemas estructurales, sumado a la desconfianza y la falta de independencia tanto de las fiscalías como del poder judicial, en especial a nivel local. Así lo reconoció la Comisión IDH tras visitar el país, estableciendo en su informe que:

*“Recibió reiteradas quejas de las víctimas sobre el actuar de las procuradurías generales de justicia estatales durante el proceso de búsqueda de justicia, y, en menor medida, también sobre la PGR. Muchas víctimas no son atendidas o no son atendidas adecuadamente cuando tratan de presentar una denuncia. En casos extremos, las familias se encuentran con tantas barreras y tanta desconfianza, que prefieren no denunciar o no dar seguimiento con las autoridades. En los casos donde sí hay denuncia, la respuesta de las autoridades presenta graves deficiencias. La CIDH recibió cientos de testimonios de personas que indican que no se activa con la inmediatez necesaria un mecanismo de búsqueda. Si se abre una investigación, los familiares de víctimas enfrentan obstáculos serios”.*¹³

Dicha problemática impacta además en la búsqueda de personas desaparecidas en la investigación y la búsqueda y localización de personas desaparecidas:

“Cuando existe, recae en procuradurías que intervienen en el marco de averiguaciones previas conducidas, como dispone la ley, por sus agentes del ministerio público. Esta aproximación ha quedado rebasada por la realidad y hoy es insuficiente, en razón de

¹³ Comisión IDH, *Informe sobre la situación de derechos humanos en México*, OEA/Ser.L/V/II.Doc. 44/15, 2015, párrs. 121 y 122.

factores como la falta de debida diligencia, la ausencia de análisis contextual, la carencia de áreas de inteligencia especializadas en el tema, la reticencia a colaborar de las instancias encargadas de investigar la delincuencia organizada, la nula coordinación interinstitucional, la insuficiencia del personal frente al inmenso número de personas desaparecidas y la aparente priorización de la identificación de los responsables sobre la localización de las y los desaparecidos.”¹⁴

En este marco de masificación de la desaparición, de indefensión de las víctimas directas e indirectas de desaparición y de impunidad estructural es que LOS DEFENSORES Y DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS así como los miembros de COLECTIVOS DE VÍCTIMAS DE DESAPARICIÓN (que también son defensores y defensoras) juegan un papel elemental en el acceso a la justicia. Lo realizan a través del acompañamiento a las víctimas en sus procesos, de forma multidisciplinaria, por lo que un insumo básico es que cuenten con el acceso a los expedientes y carpetas de investigación correspondientes.

4. EL DERECHO A LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS

En el sistema universal de derechos humanos, el derecho a la defensa de los derechos humanos ha sido reconocido en la Declaración sobre el Derecho y el Deber de los Individuos, los Grupos y las Instituciones de Promover y Proteger los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales Universalmente Reconocidos (en adelante, “Declaración sobre Defensores”). En su artículo 1º, se define ese derecho en el sentido de que “[t]oda persona tiene derecho, individual o colectivamente, a promover y procurar la protección y realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales en los planos nacional e internacional”¹⁵.

La Declaración sobre Defensores, sobre todo, refiere a las medidas que los Estados deben adoptar para permitir y no obstaculizar las actividades de defensa y promoción de los derechos humanos. Entre otras, en su artículo 14 se establece que aquéllos garantizarán la creación y el desarrollo de instituciones nacionales independientes “destinadas a la

¹⁴ Santiago Aguirre y Mario Patrón (Centro Prodh), “Un sistema de búsqueda de personas desaparecidas a la altura de la crisis”, *Nexos*, México, 2016, <https://nexus.com.mx/?p=27828>

¹⁵ Disponible en https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Defenders/Declaration/declaration_sp.pdf

promoción y la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en todo el territorio sometido a su jurisdicción”.

En los términos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, “las y los defensores de derechos humanos son un pilar esencial para el fortalecimiento y consolidación de las democracias, ya que el fin que motiva la labor que desempeñan incumbe a la sociedad en general, y busca el beneficio de ésta. Por tanto, cuando se impide a una persona la defensa de los derechos humanos, se afecta directamente al resto de la sociedad”¹⁶.

Por su parte, el derecho a defender los derechos humanos se desprende de los artículos 1º, 5º, 17, 102, 103, 105, 133 y demás relativos y aplicables de la CPEUM e inclusive ha sido explícitamente reconocido en el artículo 6º, inciso G, numeral 1 de la Constitución Política de la Ciudad de México que dispone que “[t]oda persona tiene derecho, individual o colectivamente, a promover y procurar la protección y realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales; de forma eventual o permanente”.

En esas condiciones, el derecho a defender los derechos humanos y la exigencia de su cumplimiento está protegida por el orden jurídico nacional e internacional y confiere un valor fundamental a la labor que los defensores de derechos humanos tienen para promover y procurar la protección y realización de los derechos fundamentales.

5. EL PAPEL DE LAS Y LOS DEFENSORES EN LA ASESORÍA JURÍDICA VICTIMAL

La asesoría jurídica victimal cumple una función procesal concreta de conformidad con la Constitución Política y el Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP). Está prevista como derecho en el artículo 20 constitucional inciso C), en particular:

- (I) Ser informado del desarrollo del procedimiento penal,
- (II) Coadyuvar con el Ministerio Público; a que se le reciban todos los datos o elementos de prueba con los que cuente, tanto en la investigación como en el

¹⁶ Véase para tal efecto el “Segundo Informe sobre la Situación de las Defensoras y Defensores de Derechos Humanos en las Américas”, disponible en el siguiente enlace: <https://www.oas.org/es/cidh/defensores/docs/pdf/defensores2011.pdf>

proceso, a que se desahoguen las diligencias correspondientes, y a intervenir en el juicio e interponer los recursos en los términos que prevea la ley, e

- (III) Impugnar ante autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño.

Así, por ejemplo, no tendría ningún sentido otorgar el derecho a impugnar omisiones del Ministerio Público durante la investigación (inciso III) si la víctima y sus representantes no tuvieran acceso a los registros de las investigaciones y así poder detectar omisiones del Ministerio Público.

De dicha disposición constitucional deriva el artículo 109 del Código Nacional de Procedimientos Penales que establece como derechos de las víctimas, entre otros, los siguientes:

- I. A que el Ministerio Público y sus auxiliares así como el Órgano jurisdiccional les faciliten el acceso a la justicia y les presten los servicios que constitucionalmente tienen encomendados con legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad, profesionalismo, eficiencia y eficacia y con la debida diligencia;
- V. A ser informado, cuando así lo solicite, del desarrollo del procedimiento penal por su Asesor jurídico, el Ministerio Público y/o, en su caso, por el Juez o Tribunal;
- VII. A contar con un Asesor jurídico gratuito en cualquier etapa del procedimiento, en los términos de la legislación aplicable;
- VIII. A recibir trato sin discriminación a fin de evitar que se atente contra la dignidad humana y se anulen o menoscaben sus derechos y libertades, por lo que la protección de sus derechos se hará sin distinción alguna;
- XIV. A que se le reciban todos los datos o elementos de prueba pertinentes con los que cuente, tanto en la investigación como en el proceso, a que se desahoguen las diligencias correspondientes, y a intervenir en el juicio e interponer los recursos en los términos que establece este Código;

- XVII.** A solicitar la realización de actos de investigación que en su caso correspondan, salvo que el Ministerio Público considere que no es necesario, debiendo fundar y motivar su negativa;
- XX.** A solicitar el traslado de la autoridad al lugar en donde se encuentre, para ser interrogada o participar en el acto para el cual fue citada, cuando por su edad, enfermedad grave o por alguna otra imposibilidad física o psicológica se dificulte su comparecencia, a cuyo fin deberá requerir la dispensa, por sí o por un tercero, con anticipación;
- XXI.** A impugnar por sí o por medio de su representante, las omisiones o negligencia que cometa el Ministerio Público en el desempeño de sus funciones de investigación, en los términos previstos en este Código y en las demás disposiciones legales aplicables;
- XXII.** A tener acceso a los registros de la investigación durante el procedimiento, así como a obtener copia gratuita de éstos, salvo que la información esté sujeta a reserva así determinada por el Órgano jurisdiccional;

Bajo esta premisa, es claro que la víctima tiene derecho a participar activamente en el procedimiento de investigación. Este derecho se garantiza, primero, a través del Ministerio Público quien, conforme artículo 130 fracción I del Código Nacional de Procedimientos Penales, tiene la obligación de *“vigilar que en toda investigación de los delitos se cumpla estrictamente con los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados”* ya sea de imputados o víctimas.

En segundo término, los derechos de las víctimas se podrían hacer efectivos a través de la figura del asesor jurídico gratuito que también se encuentra regulado en la Constitución y en el artículo 17 del Código Nacional de Procedimientos Penales. El Código establece en el artículo 109 fracción XV el derecho de la víctima *“A intervenir en todo el procedimiento por sí o a través de su Asesor jurídico...”* y en el artículo 110 del mismo cuerpo normativo, establece que *“el Asesor jurídico, deberá acreditar su profesión desde el inicio de su intervención mediante cédula profesional.”*

Sin embargo, actualmente **México no cuenta con el número de asesores jurídicos necesarios para representar a todas las víctimas del país.** Simplemente respecto al delito

de desaparición relacionado con los amparos que dan origen al presente *amicus curiae*, se estima que hay en todo el país entre 40 mil y cientos de miles de personas desaparecidas.

En tanto la obligación del Estado no provea de las condiciones de disponibilidad, calidad, accesibilidad (económica y geográfica) y aceptabilidad de las víctimas para asegurar su derecho de representación a través de los asesores victimales, la garantía de acceso a la justicia de las víctimas debería hacerse efectivo por las vías que les sean menos gravosas. De acuerdo con el segundo párrafo del artículo primero constitucional las normas relativas a derechos humanos se interpretarán de conformidad con la propia Constitución y con los tratados internacionales de la materia **favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia**. En atención al principio pro persona, contenido en tal numeral, la interpretación sobre alcance y contenido de derechos humanos debe ser siempre expansiva. En este sentido, todo proceso normativo o interpretativo, debe basarse en los estándares más protectores, dentro de aquellos que integran el parámetro de regularidad constitucional.

Los aspectos fácticos y materiales generan la necesidad de que las víctimas recurran a otras formas de representación y acceso a la justicia, como son las y los defensores de derechos humanos que forman parte de las organizaciones de sociedad civil, quienes de forma gratuita les prestan asistencia para el seguimiento de sus casos. Máxime si las víctimas se encuentran fuera del país y carecen de recursos económicos que les permitan tener presencia física en el seguimiento de las investigaciones. Lo esperable es que, aplicando el artículo primero, **se interprete la norma sobre la asesoría jurídica de forma tal que se expanda el derecho de las víctimas a ser representadas de la forma menos gravosa para ellas.**

Tanto la propia Constitución como el CNPP contempla otros derechos, cuyo ejercicio va mucho más allá de las dimensiones meramente procesales, como audiencias y algunas impugnaciones. Sumado al derecho a contar con asesoría jurídica, las víctimas tienen derecho a tener acceso a registros de la investigación y del proceso y a obtener copias gratuitas. También que se le reciban todos los datos o elementos de prueba con que cuente, tanto en la investigación como en el proceso, a que se desahoguen diligencias y a intervenir en el juicio e interponer recursos. Estos derechos no se encuentran sujetos a condición alguna, aún en la legislación penal.

A partir de todos estos derechos a favor de las víctimas, vemos que la representación jurídica de las víctimas en un proceso penal se desdobra en diferentes tipos de actividad. Una muy relevante, que consideramos debe ser cubierta por expertos en derecho, es la representación en audiencias. Pero hay otras formas de representación (como es la revisión de registros de investigación y del proceso) que podrían ser realizadas por personas que no necesariamente cuentan con cédula de licenciados en derecho o abogados. Por ejemplo, familiares, pasantes y defensores derechos humanos con licenciaturas en otras ramas del conocimiento.

El acceso a la justicia se debe garantizar materialmente, si las víctimas no pueden consultar directamente los registros de la investigación o el proceso penal, lo deberían poder hacer a través de los representantes que designen. De lo contrario, se negaría el acceso a la justicia al exigirles presencia física o el pago de abogados para la simple actividad de revisar los registros de investigación.

En cuanto a la reserva de la investigación coincidimos en la necesidad de resguardar la información de ésta en términos de la Constitución. Pero debe entenderse que la necesidad de reserva es diferente respecto al imputado y la víctima. Mientras que el imputado es objeto de la investigación; la víctima es coadyuvante en la misma y tiene derecho a que se le reciban los datos o elementos de prueba con los que cuente. Incluso tiene derecho a impugnar omisiones del Ministerio Público durante la investigación. ¿Cómo podrían las víctimas contribuir al éxito de las investigaciones o detectar omisiones, si no conocen directamente o a través de sus representantes el contenido y curso de éstas?

De lo anterior deriva la necesidad de que la víctima a través de los representantes que designe -sean o no abogados- pueda aportar información y datos de prueba. La reserva de la investigación debe entenderse sobre todo para evitar que las personas investigadas obstaculicen el proceso. Pero desde la visión de la víctima, es necesario que ésta tenga acceso para el fortalecimiento de las investigaciones, además de continua comunicación con el Ministerio Público. De esa manera, incluso se podrían prevenir contradicciones entre las teorías de los casos del Ministerio Público y las víctimas o sus representantes, lo cual es inconveniente para ambos, y llegar a juicio con casos mejor sustentados.

6. ACOMPAÑAMIENTO MULTIDISCIPLINARIO DE LAS Y LOS DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS Y ACCESO A LAS INVESTIGACIONES

El acompañamiento que brindan personas defensoras de derechos humanos, otras víctimas y personas allegadas a estas es fundamental para que se cuente con la protección debida al participar en una investigación penal o de cualquier otra índole, dados los riesgos que estas implican para los familiares de personas desaparecidas y dados los múltiples episodios de victimización secundaria que enfrentan por la obstaculización, la negligencia y malos tratos de agentes del ministerio público, policías y peritos.

No es casual que la propia Ley General de Víctimas contemple otra serie de derechos que tienen que ver con el acceso a medidas de ayuda, apoyo y atención (art. 7, fracción VI) que son requeridos frente a un hecho victimizante, máxime si se trata de un crimen altamente lesivo como la desaparición.

En atención a estos derechos es que debe velarse porque las víctimas puedan hacerse acompañar por personas y organizaciones que tengan experiencia en la dimensión psicosocial u otras que **faciliten precisamente su acceso a los derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación**, pues esta intervención ayuda a mitigar en cierta medida la revictimización que constantemente sufren las víctimas durante las investigaciones. Estas intervenciones de otras personas especialistas en otras ramas como la defensa de derechos humanos, la psicología, el trabajo social u otras garantiza también que las víctimas ejerzan su derecho a la orientación e información, pues facilitan que las víctimas participen en diligencias y actuaciones con alguien que les asista y les haga sentir seguras.

Esta dimensión no se ve colmada con la asesoría jurídica, sino que requiere de la intervención de otras personas que cuentan con experiencia en el acompañamiento de víctimas en distintas dimensiones y que **requieren consultar registros de la investigación y participar en diligencias que implican impactos físicos y emocionales** importantes para garantizar una adecuada asistencia, apoyo y orientación, claramente con autorización de las propias víctimas.

Asimismo, la Ley General de Víctimas prevé el derecho de estas de trabajar de forma colectiva con otras víctimas para la defensa de sus derechos (art. 7 f. XXXII). Este implica

que las víctimas puedan hacerse acompañar también de otras víctimas y autorizar que estas intervengan en diligencias y consulten las investigaciones, pues cuentan con más experiencia que muchos asesores jurídicos victimales y son, en ocasiones, el único apoyo que se tiene a mano, sin que esto sustituya la asesoría jurídica victimal que el Estado debe garantizar y que no garantiza,

La complejidad de las desapariciones y los impactos que estas generan en las vidas de las víctimas, exigen el involucramiento de personas que les brinden apoyo y acompañamiento y profesionistas expertos en diversas ramas, que cotidianamente realizan tareas de asesoría y atención a víctimas y que son autorizadas por estas para participar e intervenir en distintas diligencias y actos procesales y extraprocesales, pues ni la investigación, ni la atención, ayuda y asesoría victimal se agotan con la intervención de una persona abogada. la atención victimal debe ser integral y multidisciplinaria y por tanto debe garantizarse el acceso a las investigaciones y la participación en diligencias de las personas que la víctima o las víctimas autoricen para tal fin.

Limitar el acceso a carpetas y la participación en diligencias para que solo pueda ser llevada a cabo por personas abogadas tituladas, generaría afectaciones mucho mayores de las que ya sufren las víctimas indirectas de desaparición de personas y limitaría de manera importante sus derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación. Esto, con impactos aún más graves sobre la población migrante y también sobre población indígena, con discapacidad u otro grupo que enfrenta mayores barreras al acceso a la justicia.

7. EL IMPACTO EN EL ACCESO A LA JUSTICIA

Se han impuesto restricciones a los familiares de las personas desaparecidas que son víctimas indirectas de la desaparición. Por ejemplo,

- la falta de garantía del derecho a participar en el proceso de investigación y que sean tomadas en cuenta;
- que exista comunicación puntual y proactiva, con información suficiente; o
- la negativa a reconocerles su calidad de parte en la investigación y denegar el acceso al expediente y al nombramiento de representantes.

Todas estas restricciones agravan aún más el derecho de acceso a la justicia de las víctimas indirectas de desaparición forzada debido a su perfil socioeconómico, su nacionalidad (ser extranjeros y extranjeras y vivir fuera de México), la distancia geográfica y haber quedado sin un soporte vital dentro del núcleo familiar. Las familias de las personas desaparecidas reúnen condiciones personales y estructurales que las colocan en una situación de especial vulnerabilidad. Aunado a ello, su residencia en otro país constituye una dificultad objetiva y manifiesta para el ejercicio de sus derechos por los requisitos migratorios y la capacidad económica.

La participación en las investigaciones, que presupone el reconocimiento de la calidad de víctima y la legitimidad de intervención ante las autoridades ministeriales, debe regirse por un elemento de efectividad. Por ello, la Corte IDH ha señalado en su jurisprudencia constante la obligación de asegurar “el pleno acceso y capacidad de actuar de las víctimas o sus familiares en todas las etapas de la investigación y el juzgamiento de los responsables, de acuerdo con la ley interna y las normas de la Convención Americana”.¹⁷

Esto implica una obligación reforzada y un enfoque diferenciado de parte del Estado. Al respecto, la Comisión Interamericana ha señalado el vínculo que existe en un adecuado y efectivo acceso a la justicia cuando las familias buscan acceder a la justicia en otro país frente a situaciones de delitos graves o violaciones a derechos.¹⁸ Por su parte, el Comité de Derechos Humanos ha señalado que los recursos accesibles y efectivos de los que deben disponer todas las personas para reivindicar los derechos protegidos por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos deben ser adoptados por los Estados “para tener en cuenta la vulnerabilidad especial de ciertas clases de personas”.¹⁹

El Comité contra la Desaparición Forzada recomendó al Estado Mexicano garantizar que, con independencia del lugar en que residan las y los familiares de personas desaparecidas, el gobierno asegure “la posibilidad efectiva de obtener información y

¹⁷ Corte IDH, *Caso Del Caracazo Vs. Venezuela. Reparaciones y Costas*. Sentencia de 29 de agosto de 2002. Serie C No. 95, párr. 118.

¹⁸ Comisión IDH. *Derechos humanos de los migrantes...*, *op cit.*, párr. 234.

¹⁹ ONU, Comité de Derechos Humanos, *Observación general No. 31*, CCPR/C/21/Rev.1/Add.13, 26 de mayo de 2004. párr.15.

participar de las investigaciones y búsqueda de las personas desaparecidas”.²⁰ En términos de la materialización de garantía esto implicaba asegurar con mayor intensidad la protección de los derechos de las familias, reconociendo su condición de víctimas de manera formal, facilitando las copias del expediente y el nombramiento de representantes, como medios para hacer efectivo el acceso a la justicia, y dar oportunidad a una coadyuvancia efectiva.

En virtud de los argumentos expuestos y fundados en este escrito, solicitamos a esta PRIMERA SALA de la SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN:

Primero.- Tener por presentado el escrito de las personas académicas y especialistas firmantes, en calidad de amicus curiae.

Segundo.- Al momento de llevar a cabo su reflexión sobre el fondo del caso, analizar a la norma en su contexto, es decir, considerar:

- La crisis de violaciones graves de derechos humanos que hoy enfrenta México.
- La cantidad de víctimas de violaciones graves a derechos humanos: más de 300 mil personas asesinadas, cientos de miles de desaparecidas, un número indeterminado de personas torturadas en un marco de práctica generalizada de la tortura; a lo que se suman los más de 35 millones de delitos (ENVIPE-INEGI) que se cometen cada año.
- Los límites del sistema de justicia mexicano frente a esta realidad.
- Las deficiencias estructurales del sistema de justicia mexicano, que conllevan a un nivel de impunidad del 99% de los delitos cometidos.
- Las características socioeconómicas de las personas que son víctimas de desaparición, así como sus familiares.
- Los obstáculos extra que se enfrentan cuando las víctimas de desaparición son personas migrantes que estaban en tránsito en México.

Tercero.- Construir su razonamiento jurídico utilizando el principio pro persona establecido en el artículo primero constitucional, y garantizando el derecho de las víctimas indirectas de

²⁰ ONU, Comité contra la desaparición forzada, *Observaciones finales sobre el informe presentado por México en virtud del artículo 29, párrafo 1, de la Convención*. Versión avanzada no editada, párr. 24.


desaparición de contar con asesoría jurídica razonable, de la forma menos gravosa, a partir de las condiciones de hecho mencionadas en el punto anterior.

Cuarto.- Se permita el nombramiento de defensores y defensoras de derechos humanos como asesores jurídicos para que puedan coadyuvar en aspectos básicos como el acceso a las carpetas de investigación.

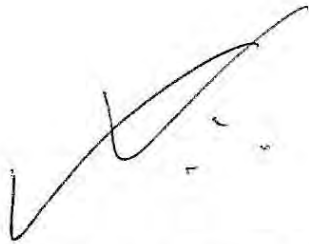
Cordial y respetuosamente,



Nombre.- Luis Daniel Vázquez Valencia
Cargo.- Profesor de tiempo completo del
IIJ-UNAM y de tiempo parcial en la
FLACSO-México



Nombre.- Elisa Ortega-Velázquez
Cargo.- Profesora de tiempo completo del
IIJ-UNAM



Nombre.- Susana Camacho
Cargo.- Especialista en sistema de justicia
penal acusatorio



Nombre.- Christel Rosales
Cargo.- Investigadora del programa de
justicia de México Evalúa



Nombre.- Ma. Guadalupe Salmoran Villar
Cargo.- Profesora de tiempo completo del
IIJ-UNAM

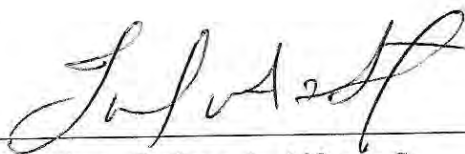


Nombre.- Erika Liliana López López
Cargo.- Docente del Posgrado en Derecho /
Integrante del Grupo de Investigaciones en
Antropología Social y Forense

Nombre.-
Cargo.-



Nombre.- Mariana Mora Bayo
Cargo.- Profesora de CIESAS - Ciudad de
México



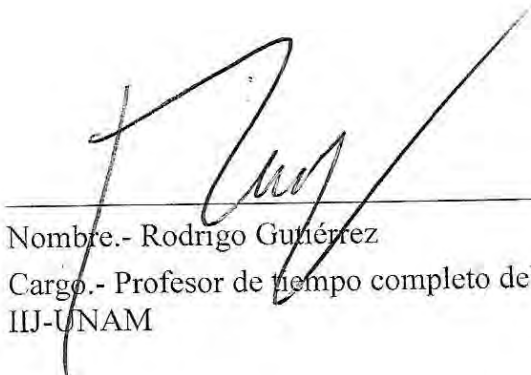
Nombre.- Tatiana A. Alfonso S.
Cargo.- Profesora del ITAM



Nombre.- Andrea Pozas-Loyo
Cargo.- Profesora del IIJ-UNAM



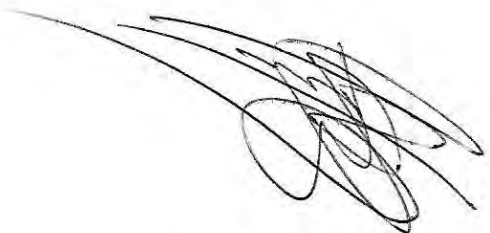
Nombre.- Volga de Pina Ravest
Cargo.- Coordinadora de la MDHyD de la
FLACSO-México




Nombre.- Rodrigo Gutiérrez
Cargo.- Profesor de tiempo completo del
IIJ-UNAM



Nombre.- Jorge Peláez Padilla
Cargo.- Academia de Derecho,
Universidad Autónoma de la Ciudad de
México



Nombre.- Francisca POU
Cargo.- Profesora asociada,
Dpto. Derecho ITAM

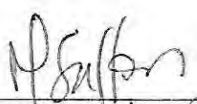


Nombre.- Sandra Penaro
Cargo.- Profesora investigadora
FLACSO México

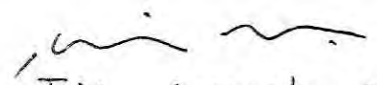
Nombre.-
Cargo.-




Nombre.- Miriam Estrada Rivera
Cargo.- Consejera Académica Aluma
de la Facultad de Derecho UNAM




Nombre.- María Paula Saffron
Cargo.- Investigadora titular
IIS - UNAM.




Nombre.- Juan González Bertrame
Cargo.- Profesor asistente
Dpto. Derecho
ITAM



Nombre.- Pauline Capdevielle
Cargo.- Investigadora Asociada "C"
de tiempo completo en el
IIS-UNAM



Nombre.- Karina H. Anselmo
Cargo.- Investigadora
IIS-UNAM



Nombre.- Myli Borge
Cargo.- Prof. Investigadora
UACM



Nombre.- Ursula Indacochea

Cargo.- Investigadora del programa de independencia judicial del Due Process of Law Foundation



Nombre.- José Raymundo Sandoval Bautista

Cargo.- Profesor investigador de la Universidad Pedagógica Nacional unidad León y defensor de derechos humanos

Nombre.- Ma. de Jesús Medina Arellano

Cargo.- Investigadora del IIJ-UNAM

Al presente amicus también se adhieren:

Dra. Erika Bárcena Arévalo
Becaria Posdoctoral, IIJ-UNAM

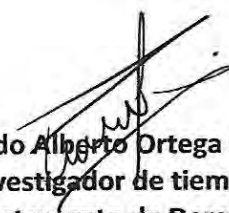
Jose Luis Caballero Ochoa
Director del Departamento de Derecho
IBERO – Ciudad de México

Hugo Concha
Profesor del IIJ-UNAM

Julio Ríos Figueroa
Profesor del CIDE

Rachel Sieder
Investigadora de CIESAS

Esta hoja forma parte del escrito de Amicus Curiae presentado por académicas y académicos de diferentes instituciones en relación con el Amparo 835/2018, Quejosa.-
Clementina Murcia González



Dr. Ricardo Alberto Ortega Soriano
Académico investigador de tiempo completo
Departamento de Derecho
Universidad Iberoamericana Ciudad de México